

INFORMARTIVO DE RELATORIA

ABRIL 2024

TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DEL HUILA



Magistrados

Dra. Nelcy Vargas Tovar

Dr. Enrique Dussán Cabrera

Dr. Gerardo Iván Muñoz Hermida

Dr. Jorge Alirio Cortes Soto

Dr. José Miller Lugo Barrero

Dr. Ramiro Aponte Pino

Relator

Dr. Danny Joan Guevara Silva

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Primera C.P. Oswaldo Giraldo López	Acción Popular 660012333000 2016 00523 02 Sentencia del 7 de marzo de 2024
<p>La Sección al decidir recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra sentencia que negó las pretensiones de la demanda, revocó la decisión de primer grado y en su lugar amparó los derechos colectivos al acceso a una infraestructura de servicios que garantice la salubridad pública, la seguridad y salubridad de la población carcelaria de los tres establecimientos penitenciarios del departamento de Risaralda, vulnerados por el municipio de La Virginia.</p> <p>Indicó que, pese a celebrar convenios con el INPEC para la reclusión de detenidos, el municipio no cuenta con un establecimiento carcelario para personas detenidas preventivamente ni se ha asociado con otros entes para crearlo, incumpliendo la obligación legal del artículo 17 de la Ley 65 de 1993. Y que, pese a no estar acreditado que los detenidos preventivos a cargo del municipio estén recluidos en los penales del departamento, el hacinamiento debe solucionarse de manera articulada y con colaboración de todos los municipios que se sirven de esos centros.</p> <p>En consecuencia, la Corporación ordenó al municipio de La Virginia que coadyuve al cumplimiento de las órdenes dadas en sentencias previas, en los términos que indiquen las mesas de trabajo conformadas para atender el hacinamiento.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Subsección B C.P. Martín Bermúdez Muñoz	Nulidad y Restablecimiento del Derecho 080012331000200901036-01 Sentencia del 25 de enero de 2024
<p>La Subsección conoció recurso de apelación interpuesto contra sentencia que declaró nulidad parcial del acto que ordenó liquidar pensión de la demandada y negó devolución de las sumas pagadas por concepto de mesadas pensionales al haber sido recibidas de buena fe.</p> <p>El caso trata sobre una señora a quien le fue reconocida pensión por la Alcaldía de Barranquilla bajo la Ley 33 de 1985, que exigía 20 años de servicio y 55 años de edad. Sin embargo, cuando se revisó su tiempo laboral, solo se acreditaron 18 años, 5 meses y 6 días de servicio.</p>	

A pesar de no cumplir con los requisitos legales, la Corporación consideró que revocar totalmente su pensión pondría en riesgo su mínimo vital, dado que es una persona de la tercera edad (74 años) sin otros recursos. Se invoca el principio de confianza legítima y buena fe, ya que la administración inicialmente le reconoció la pensión.

Por lo tanto, el Alto Tribunal mantuvo el reconocimiento pensional, pero se revoca la reducción del monto ordenada previamente, dado que no existe fundamento legal para modificar la tasa de reemplazo del 75% establecida en la Ley 33 de 1985.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección A C.P. José Roberto Sáchica Méndez	Reparación Directa 88001233300020130009402 (62.227) Sentencia del 19 de febrero de 2024
<p>El Consejo de Estado estableció que cuando la Administración contrata la prestación de un servicio público, como los servicios de salud, es como si lo ejecutara directamente, aunque acuda a contratistas debido a insuficiencias técnicas o de equipamiento, el servicio mantiene su carácter público.</p> <p>Indicó que, la responsabilidad de la Administración es directa, al igual que por los actos de sus funcionarios y pese a los pactos contractuales que hacen responsable al contratista por daños a terceros, no eximen a la Administración de responder ante ellos.</p> <p>En el caso analizado la entidad territorial demandada debe responder patrimonialmente por los daños, ya que su contratista CAPRECOM IPS actuó como administrador en su representación para la prestación de servicios de salud.</p>	

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sala 7º Especial de Decisión C.P. Martín Bermúdez Muñoz	Acción de Grupo 11001-33-31-004-2009-00349-01 (AG) Sentencia del 28 de marzo de 2024
<p>La Sala profirió sentencia dentro del trámite de revisión eventual de auto que confirmó rechazo de la demanda por caducidad y terminó el proceso.</p> <p>Consideró la Corporación que en la contabilización del término de caducidad para la acción de grupo se debe distinguir entre el daño (hecho dañoso) y el perjuicio (afectación patrimonial resultante). El término de caducidad empieza a correr desde que se causó el daño, si es instantáneo, o desde que cesó la acción vulnerante, si es</p>	

un daño sucesivo. Sin que la persistencia de los perjuicios implique la continuación del daño.

Refirió que el daño alegado por el grupo demandante fue la indebida aplicación por parte de los bancos de la reducción de tasas de interés ordenada por Fogafín entre mayo y diciembre de 1999, lo que les ocasionó pagar sumas de dinero adicionales.

Que, si bien esta acción vulnerante se presentó de forma sucesiva durante esos meses, cesó en diciembre de 1999. Lo que continuó después fue el perjuicio de no haber sido indemnizados por el daño causado.

Por lo tanto, el término de dos años para interponer la acción de grupo vencía a más tardar el 31 de diciembre de 2001, y al haber sido presentada la demanda en 2008, se confirmó la decisión.

Fuente	Acción / Radicación / Fecha
Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección C C.P. Jaime Enrique Rodríguez Navas	Reparación Directa <u>25000-23-36-000-2013-01263-01</u> <u>(57834)</u> Sentencia del 24 de enero de 2024
<p>La Subsección conoció recurso de apelación contra sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que negó las pretensiones de la demanda.</p> <p>La Sala estudió un caso donde unos demandantes reclaman la reparación por la imposibilidad de continuar con una actividad minera, alegando un posible error de las entidades al no informar sobre la presencia de comunidades indígenas que requerían consulta previa. El juez de primera instancia consideró que el plazo comenzó a correr desde que se definió la obligación de consulta, pero la Sala difiere, al considerar que el daño se generó por la posible omisión de información inicial.</p> <p>La Corporación determinó que los demandantes tuvieron certeza del presunto daño desde la sentencia de septiembre de 2010, tramite en el que el Ministerio del Interior reconoció la presencia de comunidades indígenas, admitiendo indirectamente las deficiencias en la certificación al concesionario minero.</p> <p>Por tanto, el plazo de 2 años se contabilizó desde el 1 de octubre de 2010 hasta el 1 de noviembre de 2012, feneciendo antes de que se presentara la demanda en julio de 2013. Consecuentemente, se declaró la caducidad del medio de control.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Jorge Enrique Najjar	Sentencia T-083 del 15 de marzo de 2024
<p>La Sala Cuarta de revisión amparó los derechos de una mujer de 72 años, vendedora informal por más de 30 años en un kiosco en la zona del Jarillón de Cali, quien fue desalojada en un proceso de restitución de bienes públicos y revocó la decisión que declaró improcedente el amparo, considerando que la Inspección Urbana desconoció el precedente sobre el principio de confianza legítima y el derecho al trabajo de vendedores informales, vulnerando sus derechos.</p> <p>Si bien reconoció el deber de proteger el espacio público, señaló que esa obligación no es absoluta frente a los derechos de vendedores informales.</p> <p>Encontró que se ignoró que la accionante es sujeto de especial protección por ser vendedora informal, adulta mayor y víctima de desplazamiento y estaba amparada por la confianza legítima al haber vendido allí por 30 años con permiso comunal.</p> <p>Adujo la Corte que, al desconocerlo y no ofrecerle alternativas, la Inspección y Secretaría de Gestión del Riesgo vulneraron sus derechos. Ordenó rehacer el procedimiento, ofreciéndole reubicación u oportunidades productivas que le permitan un ingreso. Advirtió no realizar más desalojos sin considerar su protección especial ni ofrecer alternativas.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Vladimir Fernández Andrade	Sentencia T-082 del 15 de marzo de 2024
<p>La Sala amparó los derechos de Rafael, anciano con demencia y abandono familiar aparente.</p> <p>En única instancia se negó el amparo al considerar que contaba con red de apoyo femenina. La Corte revocó la decisión al reprochar que el municipio debió remitirlo a institución especializada, dado su deber de proteger y asistir a adultos mayores, incluso con subsidio alimentario por indigencia.</p> <p>La Corporación señaló que, el abandono familiar es violencia intrafamiliar, caso en el cual los centros de protección deben acoger al mayor.</p> <p>Ordenó al municipio garantizar a Rafael ingreso a institución de atención integral con alojamiento y alimentación, cuyos gastos debían ser asumidos con recursos de programas sociales. Además, dispuso intervención del ICBF, Defensoría y Comisaría para restablecer derechos.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. José Fernando Reyes Cuartas	Sentencia T-112 del 10 de abril de 2024
<p>La Sala Novena de Revisión conoció de tutela interpuesta por cuatro funcionarias judiciales contra la Dirección Ejecutiva Seccional por negarles certificado presupuestal para contratar reemplazos en vacaciones, vulnerando derechos al descanso y trabajo digno.</p> <p>En primera instancia se negó el amparo. La Corte concluyó que al no conceder recursos para nombrar reemplazos se desconoció derecho al descanso, pues dos accionantes accedieron a vacaciones pero tres asumieron carga adicional al redistribuirse funciones sin reemplazo, aumentando presión laboral, afectando calidad del trabajo.</p> <p>La Corte reiteró deficiencia estructural en trámite administrativo de vacaciones individuales en rama judicial, que incide en funcionamiento de justicia. Ordenó al Consejo Superior reglamentar para garantizar efectividad del derecho a vacaciones individuales, previa consulta a jueces y planeación para evitar barreras presupuestales o logísticas.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. José Fernando Reyes Cuartas	Sentencia T-076 del 8 de marzo de 2024
<p>La Sala Novena de Revisión amparó el derecho a la estabilidad reforzada de una persona desvinculada pese a encontrarse en tratamientos médicos y en proceso de calificación de pérdida de capacidad laboral.</p> <p>El actor sufrió accidente laboral, fue incapacitado, sometido a terapias de psicología y psiquiatría y aun así despedido durante trámites médicos.</p> <p>La Corte concluyó que la empresa desconoció el derecho a la estabilidad laboral reforzada del accionante toda vez que contaba con diagnósticos que impedían el desarrollo de sus funciones, el empleador conocía tales patologías, y este no desvirtuó la presunción de despido discriminatorio al no acudir al inspector de trabajo para obtener una autorización.</p> <p>EL Alto Tribunal declaró la ineficacia del despido, ordenó reintegro, pago de salarios y prestaciones dejados de percibir, así como el pago de indemnización.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Constitucional M.P. Jorge Enrique Ibáñez Najar	Sentencia T-576 del 18 de diciembre de 2023
<p>La Sala Cuarta de Revisión en el estudio de una tutela, constató que <i>Sofía</i>, quien interrumpió embarazo voluntariamente, fue sometida a tratos contrarios a dignidad humana, servicio mala calidad, sufrimientos psicológicos y físicos innecesarios, tales como i) ausencia de supervisión médica directa durante la administración del medicamento y el dolor intenso padecido sin mitigación alguna, ii) amenazas y críticas del personal de mostrarle el feto cuanto tuviera lugar el aborto, iii) la manera como se produjo el aborto (sola en un baño, sin supervisión médica, con fuerte sangrado, haber recibido con sus manos el feto, y que lo depositaran a su vista en una caneca de basura).</p> <p>La Corte recordó que violencia obstétrica contra la mujer, incluye maltratos y abusos en servicios salud reproductiva, como durante interrupción voluntario del embarazo.</p> <p>La Corte declaró carencia objeto por daño consumado, pero llamó la atención a la clínica y a la EPS por grave violencia obstétrica, ordenó investigaciones y que se impusieran sanciones, cumplir lineamientos para servicio idóneo e interrupciones embarazo, capacitar personal y mantener confidencialidad.</p>	

Fuente	Radicación / Fecha
Corte Suprema de Justicia M.P. Carlos Roberto Solórzano Garavito	Sentencia STP9075 -2023 del 5 de septiembre de 2023 Boletín Tutelas y Sala Plena No. 04
<p>La Sala confirmó fallo que declaró improcedente acción de tutela por peticionario que consideró vulnerados sus derechos de petición y de acceso a la información pública por parte de la Fiscalía 10 Seccional de Valledupar, toda vez que respondió su derecho de petición sin haberle informado cuáles fueron los motivos por los que no compareció a la diligencia programada en la investigación penal en la que funge como denunciante.</p> <p>La Corte abordó la aplicación de la garantía de no autoincriminación en materia disciplinaria, considerando que la manifestación del funcionario en la respuesta podría perjudicar su posición en el proceso disciplinario que anunció el quejoso procedería a iniciar.</p> <p>Así, la Sala determinó que, con la respuesta de la Fiscalía sobre la programación de la audiencia de imputación, se colmó la expectativa del accionante.</p>	